COMUNICADO CONJUNTO

Guatemala: Preocupación por las persistentes restricciones y demoras en el acceso a la justicia de Virginia Laparra

20 de noviembre de 2026 – Más de sesenta organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales e internacionales comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos expresamos nuestra profunda preocupación por los obstáculos y las demoras judiciales que siguen impidiendo a **Virginia Laparra**, abogada y exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en Quetzaltenango y actualmente en el exilio, obtener una respuesta judicial efectiva frente a la criminalización que enfrenta.

En el primer proceso abierto en su contra, el recurso de casación presentado sigue sin resolverse más de cinco meses después de la audiencia, pese a que la ley establece un plazo de quince días. La revisión de su segunda condena sigue paralizada porque se exige su comparecencia personal para examinar los cuestionamientos sobre las medidas adoptadas en su contra, pese al riesgo de detención que enfrentaría al regresar. A ello se suma un amparo relacionado con su libertad personal que, en noviembre de 2026, concluyó sin examen de fondo.

1. La Corte Suprema de Justicia aún no resuelve el recurso de casación sobre la primera condena

En diciembre de 2022, Virginia Laparra fue condenada por abuso continuado de autoridad, en relación con denuncias administrativas que había presentado contra el entonces juez Lesther Castellanos. La sentencia fue confirmada en apelación en 2023. Posteriormente, su defensa interpuso un recurso de casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la anulación de la condena por motivos de fondo. La audiencia pública se celebró el 22 de mayo de 2026.

El artículo 446 del Código Procesal Penal de Guatemala establece que la Cámara Penal debe resolver el recurso de casación en un plazo de quince días posteriores a la audiencia. Más de cinco meses después, y según la información disponible, aún no se ha dictado resolución.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que los procedimientos judiciales deben desarrollarse sin dilaciones indebidas.

Condenamos firmemente las demoras judiciales y el trato desigual al que ha sido sometida Virginia Laparra, que en la práctica le han negado el acceso a la justicia y ponen en riesgo su libertad.

2. La Corte de Constitucionalidad no examinó el fondo de los cuestionamientos contra las medidas de detención

La revisión de la segunda condena contra Virginia Laparra sigue paralizada por una serie de decisiones judiciales que le impiden ejercer efectivamente su derecho a recurrir la condena.

El 8 de julio de 2024, un tribunal de Quetzaltenango condenó a Virginia Laparra a cinco años de prisión conmutables, una multa de 50.000 quetzales y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años por el delito de revelación de información confidencial o reservada. Según Virginia Laparra, la acusación tuvo su origen en una solicitud de reprogramación de una audiencia que presentó en el ejercicio de sus funciones como fiscal. Su defensa recurrió la condena.

El 5 de junio de 2025, mientras Virginia Laparra se encontraba en el exilio, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango la declaró en rebeldía por no comparecer, ordenó su detención y arraigo y dispuso la emisión de una orden de captura internacional. Como consecuencia de esta resolución, quedó suspendido el recurso presentado para revisar la segunda condena.

La defensa cuestionó si la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango tenía facultades para adoptar dichas medidas, argumentando que estas corresponden a los juzgados de primera instancia y a los tribunales de sentencia. El 27 de octubre de 2026, la Corte de Constitucionalidad decidió no examinar el fondo de estos argumentos, al considerar necesaria la comparecencia personal de Virginia Laparra ante la autoridad judicial. La decisión fue adoptada por cinco votos contra dos, con los votos disidentes de las magistradas Gladys Anabella Morfín Mansilla y Astrid Jeannette Lemus Rodríguez.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad sitúa a Virginia Laparra ante una disyuntiva imposible. Si permanece en el extranjero, la impugnación contra la orden de detención no podrá avanzar y el recurso presentado para revisar su condena seguirá suspendido. Si regresa a Guatemala, se expone a ser detenida en virtud de la misma orden que pretende impugnar y a regresar al sistema penitenciario en el que ya estuvo privada de libertad durante casi dos años. En su Opinión 24/2023, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria calificó dicha privación de libertad como arbitraria y contraria al derecho internacional. La orden de captura internacional también la expone al riesgo de ser detenida en el extranjero.

Para las organizaciones e instituciones firmantes, resulta especialmente preocupante que estas decisiones judiciales impidan a Virginia Laparra obtener una revisión de su condena, mientras los cuestionamientos sobre la legalidad de las medidas que obstaculizan dicha revisión siguen sin recibir una respuesta de fondo. Esta situación menoscaba su derecho de acceso a la justicia, su derecho a que se revise su condena y su derecho a la tutela judicial efectiva. El hecho de que la sentencia se dictara formalmente en su ausencia constituye, además, una circunstancia procesal relevante que debe tenerse en cuenta.

Las preocupaciones por la seguridad de Virginia Laparra se han intensificado tras el asesinato, ocurrido el 17 de octubre de 2026, de Juan Francisco Solórzano Foppa, quien murió en un ataque armado en un complejo deportivo de Ciudad de Guatemala. Al igual que Virginia Laparra, era exfiscal y abogado reconocido por su trabajo contra la corrupción. Sin prejuzgar el móvil de ese crimen, este hecho pone de relieve la necesidad urgente de que las autoridades guatemaltecas adopten garantías efectivas de protección para quienes trabajan o han trabajado en el ámbito de la justicia y contra la corrupción.

Asimismo, las organizaciones e instituciones firmantes nos sumamos a las preocupaciones expresadas por Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, respecto del posible carácter represivo de los procesos judiciales iniciados contra Virginia Laparra por su labor como fiscal, la falta de examen de fondo tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad del 27 de octubre de 2026 y las persistentes demoras judiciales. Reiteramos, además, su llamamiento a poner fin a la criminalización de personas operadoras de justicia en Guatemala y a garantizar condiciones para el retorno voluntario y seguro de quienes se encuentran en el exilio, con plenas garantías para su seguridad y el ejercicio de sus derechos.

3. La Corte Suprema de Justicia suspende definitivamente el amparo sin examen de fondo

Otro ejemplo de las persistentes demoras judiciales y de la falta de examen de fondo en el caso de Virginia Laparra es el amparo promovido en relación con su prisión preventiva.

En noviembre de 2026, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia suspendió definitivamente, por falta de materia, el amparo 334-2023 promovido contra la resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del 19 de diciembre de 2022, que había confirmado la negativa de revisar la prisión preventiva de Virginia Laparra.

La Cámara consideró que el amparo había perdido su objeto porque, el 3 de enero de 2024, se le había concedido el arresto domiciliario. Como resultado, casi cuatro años después de la resolución impugnada, el procedimiento concluyó sin que se examinaran de fondo las alegaciones sobre la legalidad de su privación de libertad. Además, se impuso una multa de 1.000 quetzales al abogado defensor.

Esta decisión debe examinarse también en el contexto del segundo proceso penal contra Virginia Laparra. El 19 de octubre de 2022, cuando se le negó una solicitud de arresto domiciliario, fue notificada de una nueva orden de aprehensión, pese a encontrarse ya privada de libertad. Dicha orden estaba relacionada con el segundo proceso penal, por revelación de información confidencial o reservada, que posteriormente dio lugar a la condena de julio de 2024, cuya revisión continúa suspendida.

El hecho de que un amparo vinculado a decisiones sobre la libertad personal de Virginia Laparra haya permanecido pendiente durante años y haya concluido sin un pronunciamiento de fondo profundiza las preocupaciones sobre la efectividad y oportunidad de la tutela judicial, especialmente a la luz de los artículos 7.6 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En su conjunto, estas decisiones revelan un preocupante patrón de obstáculos procesales y prolongadas demoras judiciales que han impedido a Virginia Laparra obtener una respuesta judicial de fondo a las impugnaciones relativas tanto a su privación de libertad como a su condena penal.

Ante la persistencia de estos obstáculos, las organizaciones firmantes instamos a las autoridades guatemaltecas a:

1. Garantizar que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelva, sin más dilaciones, el recurso de casación relativo a la primera condena de Virginia Laparra, de manera independiente e imparcial y de conformidad con el plazo establecido en el artículo 446 del Código Procesal Penal.
2. Permitir el examen efectivo de las impugnaciones contra las medidas dictadas por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango, así como la revisión de la segunda condena, a través de la defensa de Virginia Laparra, sin condicionar el estudio del fondo a su retorno a Guatemala, cuando su libertad y seguridad se encuentran en riesgo.
3. Dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en la Opinión 24/2023 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.
4. Garantizar sus derechos a la tutela judicial efectiva, la defensa, el debido proceso y la resolución de los procedimientos dentro de los plazos establecidos por la ley y de un plazo razonable, evitando que las exigencias procesales se conviertan en obstáculos desproporcionados para el acceso a la justicia.

El acceso a la justicia no puede quedar condicionado a que una persona ponga en riesgo su libertad o su seguridad para conseguir que un tribunal examine sus argumentos.

Nota sobre Virginia Laparra

Virginia Laparra fue responsable de la sede de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público en Quetzaltenango, desde donde se investigaban hechos relacionados con corrupción y criminalidad organizada.

Fue detenida en febrero de 2022, después de presentar denuncias administrativas relacionadas con la actuación de un juez. Permaneció alrededor de 22 meses privada de libertad y Amnistía Internacional la reconoció como presa de conciencia. En abril de 2023, en su Opinión 24/2023, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria determinó que su detención fue arbitraria y reclamó medidas de reparación.

El 3 de enero de 2024 obtuvo arresto domiciliario. El 18 de julio de 2024 salió de Guatemala, diez días después del pronunciamiento de su segunda condena, y desde entonces permanece en el exilio.

Firmantes:

Organizaciones nacionales e internacionales:

1. 100% Estrógeno ONG- Venezuela
2. ACAT España-Catalunya
3. Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador- Ecuador
4. Alianza por las Reformas- Guatemala
5. Amnistía Internacional- Internacional
6. Asociación Convergencia Ciudadana de Mujeres (Converge Mujeres)- Guatemala
7. Asociación de Abogados y Abogadas, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (AJUFIDH)- Regional
8. Asociación Iniciativa por una Justicia Igualitaria- España
9. Asociación par el Litigio Estratégico (ASOL)- Guatemala
10. Associació "Grup de Juristes Roda Ventura"-Catalunya
11. Associació Llegat Jaume Botey i Vallès-Catalunya
12. Blueprint for Free Speech- Internacional (Austria y Alemania)
13. Casa Centroamérica- México
14. Centinelas por la Dignificación del Estado- Guatemala
15. CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana- Sudáfrica
16. Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala (CODEFEM)- Guatemala
17. (CLADEM)- Guatemala
18. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
19. Convergencia por los Derechos Humanos- Guatemala
20. Colectivo Autogestionario de Solidaridad entre el Área Latina (Colectivo CASAL)- España
21. Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS)- Guatemala
22. Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba- Argentina
23. Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos- Internacional
24. Guatemalan Human Rights Comission- Estados Unidos
25. Fundación Privada L'Olivera- España
26. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.OS)- México

27. International Care Ministries (ICM)- Guatemala.
28. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)- Mesoamérica
29. Iniciativa por una Justicia Igualitaria- Venezuela
30. Instituto de Defensa Legal (IDL)- Perú
31. Instituto de Enseñanza para el Desarrollo (IEPADES)- Guatemala Iniciativa por una Justicia Igualitaria- Venezuela
32. International Service for Human Rights- Suiza/ Estados Unidos
33. Justicia en el Exilio- Guatemala
34. Justícia i Pau- España
35. Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente- Guatemala
36. Nobel Women's Initiative- Canadá
37. Observatori DESCA- España
38. Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo en el marco de la Misión Internacional de Juristas por Guatemala- Internacional
39. Organización de Mujeres Tierra Viva- Guatemala
40. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos
41. Plataforma Internacional contra la Impunidad- Internacional
42. Programa ACTuando Juntas Jotay- Guatemala
43. Protección Internacional Mesoamérica- Regional
44. Red de la No Violencia Contra las Mujeres (REDNOVI) Guatemala
45. Red de Solidaridad para la Transformación Social (REDS)- España
46. Red EU-LAT- Bélgica.
47. Red Europea de Comité Óscar Romero- Bélgica
48. Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción- Guatemala
49. Robert & Ethel Kennedy Human Rights Centre- USA
50. Taula pels Drets Humans i la Pau a l'Amèrica Central- Guatemala
51. The Allard Prize Foundation- Reino Unido
52. Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)- Guatemala
53. Voces Guatemaltecas en el Exilo- Estados Unidos, México, Costa Rica, España

Otras instituciones y entidades:

1. Ajuntament de Barcelona- España
2. Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible- España
3. Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Universidad Nacional Autónoma de México (CIALC-UNAM)- México
4. Col.lectiu Ronda SCCL- España
5. Germanor Obrera d'Acció Catòlica- España- Catalunya
6. Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)- Guatemala
7. Universidad Rafael Landívar- Guatemala

Personas individuales:

1. Abogada y defensora de derechos humanos guatemalteca- María Eugenia Solis García
2. Ex Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala- Jordán Rodas

3. Magistrada en retiro Julia María del Carmen García y González como Directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación
4. Magistrada en retiro María Emilia Molina de la Puente, como Presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

ENGLISH:

JOINT STATEMENT

Guatemala: Concern Over Persistent Restrictions and Delays in Virginia Laparra's Access to Justice

November 19, 2026- More than sixty civil society organizations and national and international institutions committed to the defense and promotion of human rights express their deep concern over the judicial obstacles and delays that continue to prevent Virginia Laparraa, a lawyer and former prosecutor with the Special Prosecutor's Office Against Impunity (FECI) of the Public Prosecutor's Office (MP) in Quetzaltenango and currently in exile, from obtaining an effective judicial response to the criminalization she faces.

In the first case brought against her, the appeal filed remains unresolved more than five months after the hearing, even though the law establishes a fifteen-day deadline. The review of her second conviction remains stalled because her personal appearance is required to address the challenges regarding the measures taken against her, despite the risk of arrest she would face upon returning; and, finally, added to this is a writ of amparo related to her personal liberty, which, in November 2026, was dismissed without a substantive review.

1. The Supreme Court of Justice has yet to hand down it appeal decision

In December 2022, Virginia Laparra was convicted of continued abuse, following administrative complaints she had filed against the then judge, Lesther Castellanos. The conviction was upheld on appeal in 2023. Her lawyers then asked the Criminal Chamber of the Supreme Court of Justice to overturn it. The case was heard on 22 May 2026.

Article 446 of the Criminal Procedure Code of Guatemala states that the court must resolve the appeal within 15 days of the hearing. More than five months later, no such decision has been handed down. What is.

The UN Human Rights Committee requires that legal proceedings must take place without undue delays.

We strongly condemn the delays in legal proceedings and the unequal treatment of Virginia Laparra, which has effectively denied her justice and places her life and liberty at risk.

2. The Constitutional Court's refusal to consider the merits of her case

The review of Virginia Laparra's second conviction remains stalled following a series of judicial decisions that prevent her from effectively exercising her right to appeal.

On 8 July 2024, a court in Quetzaltenango convicted Virginia Laparra of disclosing confidential or classified information and sentenced her to five years' commutable imprisonment, a fine of 50,000 quetzales and a ten-year ban from holding public office. According to Virginia Laparra, the charge arose from her request to reschedule a hearing in the exercise of her duties as a prosecutor. Her lawyers appealed the conviction.

On 5 June 2025, while Virginia Laparra was in exile, the Fifth Chamber of the Quetzaltenango Court of Appeals declared her in default for failing to appear, ordered her arrest and pretrial detention, and issued an international arrest warrant. As a result of this decision, her appeal against the conviction was suspended.

Her lawyers challenged the Fifth Chamber's authority to adopt these measures, arguing that such powers lie with trial and sentencing courts. On 27 October 2026, the Constitutional Court declined to examine the substance of these arguments. By five votes to two, it held that Virginia Laparra must appear in person before the judicial authority before her challenge can be examined. Justices Gladys Anabella Morfín Mansilla and Astrid Jeannette Lemus Rodríguez dissented.

The Constitutional Court's decision leaves Virginia Laparra with an impossible choice. If she remains abroad, her challenge to the arrest order cannot proceed and her appeal against the conviction remains suspended. If she returns to Guatemala, she faces arrest under the very order she is seeking to challenge and the prospect of returning to the prison system in which she was previously detained for almost two years. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention, in its Opinion No. 24/2023, found that her previous deprivation of liberty was arbitrary and contrary to international law. The international arrest warrant also exposes her to the risk of arrest abroad.

The undersigned organisations and institutions are deeply concerned that these judicial decisions effectively prevent Virginia Laparra from obtaining a review of her conviction, while the legality of the measures obstructing that review remains unexamined. This situation undermines her right of access to justice, her right to have her conviction reviewed and her right to an effective judicial remedy. The fact that the judgment was formally delivered in her absence is also a relevant procedural circumstance that must be taken into account.

Concerns for Virginia Laparra's safety have intensified following the killing of Juan Francisco Solórzano Foppa on 17 October 2026 in an armed attack at a sports complex in Guatemala City. Like Virginia Laparra, he was a former prosecutor and a lawyer known for his anti-corruption work. Without prejudging the motive for his killing, this attack underscores the urgent need for the Guatemalan authorities to adopt effective measures to protect current and former justice officials and those involved in combating corruption.

The undersigned organisations and institutions echo the concerns expressed by Margaret Satterthwaite, the United Nations Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, regarding the potentially repressive nature of the criminal proceedings brought against Virginia Laparra in connection with her work as a prosecutor, the lack of substantive judicial review following the Constitutional Court's decision of 27 October 2026, and the persistent delays in the proceedings. We also reiterate her call to end the criminalisation of justice officials in Guatemala and to ensure conditions for the voluntary and safe return of those in exile, with full guarantees for their safety and the exercise of their rights.

3. Supreme Court's dismissal of the amparo without substantive review

A further example of the persistent judicial delays and lack of substantive review in Virginia Laparra's case concerns the constitutional challenge to her pretrial detention.

In November 2026, the Chamber of Amparo and Preliminary Hearings of the Supreme Court of Justice definitively dismissed amparo proceedings No. 334-2023, brought against a decision of 19 December 2022

by the Second Chamber of the Court of Appeals, which had upheld the refusal to review Virginia Laparra's pretrial detention.

The Supreme Court Chamber considered that the amparo had become moot because Virginia Laparra had been granted house arrest on 3 January 2024. As a result, nearly four years after the decision was challenged, the proceedings concluded without a substantive examination of the arguments concerning the legality of her pretrial detention. Moreover, the Chamber imposed a fine of 1,000 quetzales on her defence lawyer.

This decision must also be understood in the context of the second criminal proceedings against Virginia Laparra. On 19 October 2022, when her request for house arrest was denied, she was served with a new arrest warrant despite already being in detention. That warrant concerned the criminal proceedings for disclosing confidential or classified information that subsequently led to her second conviction in July 2024, the review of which remains suspended.

The fact that a constitutional remedy concerning Virginia Laparra's right to liberty remained pending for years and ultimately concluded without a substantive ruling raises serious concerns about the effectiveness and timeliness of judicial protection in her case.

Taken together, these decisions reveal a troubling pattern in which procedural obstacles and prolonged judicial delays have prevented Virginia Laparra from obtaining a substantive judicial response to challenges concerning both her deprivation of liberty and her criminal conviction

In light of these persistent obstacles, the undersigned organizations urge the Guatemalan authorities to:

1. Ensure that the Criminal Chamber of the Supreme Court of Justice decides Virginia Laparra's appeal against her first conviction without further delay, independently and impartially, as Article 446 requires.
2. Allow her challenge to the Fifth Chamber's arrest order, and her appeal against her second conviction, to be heard through her lawyers, without requiring her to return to a country where her liberty and safety are at risk.
3. Comply with Opinion 24/2023 of the UN Working Group on Arbitrary Detention.
4. Guarantee her right to due process, to a defence and to decisions within the time limits set by law.

Access to justice cannot be contingent on a person having to risk their liberty or security in order to have a court examine their arguments.

Note on Virginia Laparra

Virginia Laparra headed the Quetzaltenango office of the Special Prosecutor's Office Against Impunity (FECI) within the Public Prosecutor's Office, which investigated cases related to corruption and organized crime.

She was arrested in February 2022 after filing administrative complaints regarding a judge's conduct. She remained in detention for approximately 22 months, and Amnesty International recognized her as a prisoner of conscience. In April 2023, in its Opinion No. 24/2023, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention determined that her detention was arbitrary and called for reparations.

In January 2024 she was released under house arrest. She left Guatemala on 18 July 2024, ten days after her second conviction.

Signatories:

National and international organizations:

1. 100% Estrógeno NGO- Venezuela
2. ACAT Spain-Catalonia- Spain
3. Alliance for Reforms- Guatemala
4. Alliance of Human Rights Organisations of Ecuador- Ecuador
5. Amnesty International- International
6. Association for Equal Justice (Asociación Iniciativa por una Justicia Igualitaria)- Spain
7. Association for Strategic Litigation (ASOL)- Guatemala
8. Association for Women's Civic Convergence (Converge Mujeres)- Guatemala
9. Association of Human Rights Lawyers, Judges and Prosecutors of Latin America and the Caribbean (AJUFIDH)- Regional
10. Associació Grup de Juristes Roda Ventura- Catalonia, Spain
11. Associació Llegat Jaume Botey i Vallès- Catalonia, Spain
12. Blueprint for Free Speech- International (Austria and Germany)
13. Casa Centroamérica- Mexico
14. Catalan Roundtable for Human Rights and Peace in Central America (Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a l'Amèrica Central)- Catalonia, Spain
15. Centinelas por la Dignificación del Estado- Guatemala
16. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation- South Africa
17. Collective for the Defence of Women's Rights in Guatemala (CODEFEM)- Guatemala
18. Convergence for Human Rights- Guatemala
19. EU-LAT Network- Belgium
20. European Network of Óscar Romero Committees- Belgium
21. Families and Friends against Crime and Kidnapping (FADS)- Guatemala
22. Families of Disappeared Persons and Political Detainees of Córdoba- Argentina
23. Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)- United States
24. Guatemalan Network of Positive Women in Action- Guatemala
25. Guatemalan Voices in Exile (Voces Guatemaltecas en el Exilio)- United States, Mexico, Costa Rica and Spain
26. H.I.J.O.S. (Children for Identity and Justice against Forgetting and Silence)- Mexico
27. Initiative for Equal Justice (Iniciativa por una Justicia Igualitaria)- Venezuela
28. Institute for Development Education (IEPADES)- Guatemala
29. International Care Ministries (ICM)- Guatemala
30. International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders- International
31. International Observatory for Lawyers at Risk (OIAD), within the framework of the International Mission of Jurists for Guatemala- International
32. International Platform against Impunity- International
33. International Service for Human Rights (ISHR)- Switzerland and United States
34. Justice in Exile (Justicia en el Exilio)- Guatemala

35. Justícia i Pau- Spain
36. L'Olivera Private Foundation (Fundació Privada L'Olivera)- Spain
37. Latin American and Caribbean Committee for the Defence of Women's Rights (CLADEM)- Guatemala
38. Legal Defence Institute (IDL) – Peru
39. Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders (IM-Defensoras)- Mesoamerica
40. Nobel Women's Initiative- Canada
41. Non-Violence against Women Network (REDNOVI)- Guatemala
42. Observatori DESCA- Spain
43. Protection International Mesoamerica- Regional
44. Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center- United States
45. Self-managed Collective for Solidarity within the Latin Area (CASAL)- Spain
46. Solidarity Network for Social Transformation (REDS)- Spain
47. The Allard Prize Foundation- Canada
48. Tierra Viva Women's Organisation- Guatemala
49. ACTuando Juntas Jotay Programme- Guatemala
50. Unit for the Protection of Human Rights Defenders in Guatemala (UDEFEGUA)- Guatemala
51. Women's Movement with Constituent Power- Guatemala
52. World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders- International

Other institutions and organizations:

1. Barcelona City Council (Ajuntament de Barcelona)- Spain
2. Centre for Research on Latin America and the Caribbean, National Autonomous University of Mexico (CIALC-UNAM)- Mexico
3. Col·lectiu Ronda SCCL- Spain
4. Germanor Obrera d'Acció Catòlica- Catalonia, Spain
5. Judges for Democracy (JJpD) and the Progressive Union of Prosecutors (UPF)- Spain
6. Rafael Landívar University- Guatemala
7. UNESCO Chair in Sustainable Human Development- Spain

Individuals:

1. Julia María del Carmen García y González, retired judge, in her capacity as Director of the National Association of Circuit Judges and District Judges of the Federal Judiciary- Mexico
2. María Emilia Molina de la Puente, retired judge, in her capacity as President of the Mexican Association of Women Judges- Mexico
3. Jordán Rodas, former Human Rights Ombudsman of Guatemala
4. María Eugenia Solis García, Guatemalan lawyer and human rights defender